



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

Bogotá, veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA	ACCIÓN DE TUTELA
RADICACIÓN	Nº. 2022-00420
ACCIONANTE	LUISA FERNANDA MORATO RIOS
ACCIONADO	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

*Procede el Despacho a resolver la acción de Tutela impetrada por la señora Luisa Fernanda Morato Ríos, en contra de la **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**.*

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO

La señora Luisa Fernanda Morato Ríos, en nombre propio interpuso acción de tutela por considerar vulnerado sus derechos al mínimo vital en conexidad con la salud y vida digna, con fundamento en los siguientes:

HECHOS:

Manifiesta la accionante que entre el 16 de junio de 2020 y el 03 de julio de 2020 estuvo internada en la CLÍNICA MONSERRAT debido a un diagnóstico de PACIENTE CON TRASTORNO BIPOLAR PORT HC-TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR RECURRENTE, dado que por su estado de salud requería una atención que de urgencia no cubrió su EPS Compensar tuvo que asumir en forma particular los altos costos de dicha prestación de servicios, que este pago le causó un gran hueco en sus finanzas personales y familiares, tomó la decisión de realizar el recobro ante la EPS.

Dado que la gestión adelantada con su EPS no fue exitosa, el 26 de agosto de 2020 acudió a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD – DELEGATURA PARA LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN a efectos de adelantar proceso para la devolución de los dineros cancelados por su aseguradora. Este proceso fue radicado bajo el número NURC 1-2020-443346 y que, tras un par de años de la presentación de la demanda, la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD – DELEGATURA PARA LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN, el único trámite adelantado por dicho despacho ha sido el AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA. Ante esta situación, ha presentado varias peticiones para ver qué ha sucedido con el impulso procesal que se le debe dar al caso, frente a lo cual las respuestas han sido superficiales como los resultados de un proceso que no avanza; situación que ha afectado seriamente sus ingresos, máxime cuando el efecto de la pandemia también le generó menoscabos en sus finanzas, afectando su derecho a la salud, agravando sus estados de ansiedad y el mínimo vital que le permita subsistir.

PRETENSIONES

Por lo tanto, acude la accionante al aparato judicial para que se le tutele sus derechos fundamentales vulnerados como lo son los derechos al mínimo vital en conexidad con la salud y vida digna, para que se le ordene a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD surta los trámites necesarios para ordenar a la EPS el reembolso

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

de los dineros adeudados y dar cuenta del impulso procesal que le debe dar a su reclamación presentada.

REGLAS DE COMPETENCIA

Este despacho es competente para conocer del asunto, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y con los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, lo que indica que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública e incluso de particulares.

La acción de tutela constituye un mecanismo encaminado a la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier autoridad e incluso en algunos casos por los particulares.

ADMISIÓN Y LITIS

La presente acción de Tutela fue admitida mediante auto del día trece (13) de junio de dos mil veintidós (2022), y se ordenó vincular al presente asunto a la Clínica Monserrat y a la EPS Compensar, oficiar a las partes accionada y vinculada para que contesten la acción y aporten las pruebas que pretendan hacer valer.

CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURÍDICO

*Corresponde al Juez de tutela, determinar si a la señora **LUISA FERNANDA MORATO RÍOS**, se le está vulnerando sus derechos al mínimo vital en conexidad con la salud y vida digna, conforme a la documental allegada.*

IDENTIFICACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL INVOLUCRADO

DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS.

DERECHO A LA SALUD

*Está ligada al derecho a la **VIDA**, cuando éste se compromete con la trasgresión de aquel.*

Respecto de ese tema, la H. Corte Constitucional expresó:

“(...) el derecho a la Salud y a la integridad física emergen como fundamentales cuando su amenaza o vulneración representan peligro o daño al derecho fundamental a la vida, de manera que será necesario protegerlo dado el caso” (Sentencias T-140, T-192 y T-531 de 1994).”



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

Mucho más ha de exigirse respecto al derecho a la Salud al Estado, pues aquél fue consagrado a cargo de este como un servicio público, el cual comporta garantizar “a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”, correspondiéndole al ente estatal “organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes...” (Art. 49 de la C.N.).

Por eso, “Las entidades públicas y privadas prestadoras de servicios asistenciales de salud y de seguridad social, deben, directamente o mediante un tercero, suministrar la atención médica, quirúrgica, hospitalaria y demás servicios indispensables en los lugares y condiciones que exija el caso concreto de cada paciente, teniendo muy en cuenta su estado de gravedad; en pocas palabras, el Estado es responsable de garantizar que las entidades de previsión social estén dispuestas en todo momento a brindar atención oportuna y eficaz a sus usuarios” (Sentencia T-531 de 1994, M. P. Dr. FABIO MORON DIAZ).

El derecho a la **SALUD** implica vivir de una forma digna, plena, con salud corporal. En relación con este punto, la **H. Corte Constitucional**, en Sentencia T-123 de marzo 14 de 1994, expresó:

“El derecho a la vida comporta como extensión el derecho a la integridad física y moral, así como el derecho a la salud. No se puede establecer una línea divisoria entre los tres derechos, porque tienen una conexión íntima, esencial y, por ende, necesaria. El derecho a la salud y el derecho a la integridad física y moral, se fundamentan en el derecho a la vida, el cual tiene su desarrollo inmediato en aquellos. Sería absurdo reconocer el derecho a la vida, y al mismo tiempo, desvincularlo de los derechos consecuenciales a la integridad física y a la salud. Desde luego, es factible establecer entre los tres derechos una diferencia de razón con fundamento en el objeto jurídico protegido de manera inmediata; así, el derecho a la vida protege de manera próxima el acto de vivir. La integridad física y moral, la plenitud y totalidad de la armonía corporal y espiritual del hombre, y el derecho a la salud, el normal funcionamiento orgánico del cuerpo, así como el adecuado ejercicio de las facultades intelectuales.

(.....) El tratadista Javier Hervada, complementa lo expuesto con el siguiente comentario:

Es el derecho del hombre a mantener y conservar del mejor modo posible su existencia humana, su vida plenaria, su salud corporal, su ser de hombre, que es el requisito indispensable para poder llegar a ser lo que está llamado a ser. Y es que el ser no existente no puede realizar función alguna; el ser mermado en sus facultades sólo puede ejercer sus funciones imperfectamente; sólo el ser sano puede cumplir a cabalidad su destino. El derecho a la vida, por tanto, se desglosa, a su vez, en una serie de derechos más concretos: el derecho a la vida saludable e íntegra se mantiene en pie en cualesquiera circunstancias.”

El caso en concreto.



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ**

Así las cosas, procede esta Juez Constitucional al estudio en sede de tutela, indicando que la aquí peticionaria invoca como derechos conculcados el mínimo vital en conexidad con la salud y vida digna, supuestamente vulnerado por la accionada y/o vinculadas.

Haciendo alusión a la entidad vinculada Clínica Monserrat indicó que: “..es cierto, de acuerdo con la Historia Clínica la paciente estuvo hospitalizada en las fechas del 16 de junio de 2020 y el 03 de julio de 2020, sin embargo, los diagnósticos que reposan en nuestros registros para esas fechas son: F329 Episodio depresivo no especificado, F419 Trastorno de ansiedad no identificado, F322 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos..”.

Por su parte la entidad vinculada EPS Compensar indico que la señora “LUISA FERNANDA MORATO RIOS, identificada con cédula ciudadanía 1.014.209.124, se encuentra ACTIVO, en el plan PBS de Compensar EPS, en calidad de dependiente de la empresa SERINCO ESPAÑA SUCURSAL EN COLOMBIA... “Se evidencia que, en el año 2021, en noviembre se atendió el requerimiento hecho por la Superintendencia de Salud respecto a la solicitud de reembolso, en dicha respuesta se indicó que en efecto la usuaria acudió a la Clínica de Monserrat en donde se les indicó que esta no era una ISP contratada con esta entidad para el PBS, y a pesar de ellos de manera voluntaria decidió quedar en estancia allí.” ... Ahora bien haciendo un análisis de lo pedido por la accionante en la presente acción se observa que la misma no va enfocada a un tema asistencial para salvaguardar el derecho a la salud, sino que la misma va encaminada a librar una exigencia económica por la atención particular que decidió tomar, la cual no fue cubierta por esta EPS. En ese orden se hace sumamente importante indicar y que es requisito para la procedencia del presente tramite, que este no debe ser utilizado para incoar peticiones de índole económica. Pues el trámite de reembolso por parte del sistema general de seguridad social en salud debe ser adelantado exclusivamente ante la FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD tramite que fue hecho por la usuaria y que actualmente está en curso por lo cual lo que procede es que la usuaria se atenga a lo resulto por el mismo y no entorpezca el aparato judicial poniendo otros medios judiciales los cuales son procedentes para lo solicitado...”.

Y la entidad accionada FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, manifestó: “...esta delegada judicial es el único despacho que, a nivel nacional, conoce de los asuntos referentes al tema del accionante (reembolsos por pagos por la prestación de servicios de salud). Estos se tramitan siguiendo un estricto orden cronológico de ingreso, salvo la prelación que se da a aquellos casos en que puede resultar comprometida la vida y la salud del usuario. En el caso que nos ocupa, la pretensión del actor es de componente económico. En el presente asunto, la mora en la decisión por parte de esta delegada que resuelva las pretensiones del actor está justificada, teniendo en cuenta el alto número de casos a cargo frente al escaso números de funcionarios, con lo que se hace imposible cumplir estrictamente con el término procesal fijado en la Ley. Sin duda, el número de procesos desborda ampliamente la capacidad resolutive de los funcionarios asignados para ello, no obstante, la ardua y tesonera labor de todos y cada uno de los funcionarios que componen el despacho. Entonces, la demora en la toma de decisión en el asunto de



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

marras no obedece a inactividad o desidia por parte de este despacho, sino a situaciones que como se explicó, rebosan su capacidad de decisión oportuna. El presente cuadro muestra el número de demandas recibidas desde el año 2019 a la fecha y aquellas que se encuentran pendientes de decisión, en el cual se evidencia la ardua labor que se ha desempeñado acorde al número de funcionarios que hacían parte de esta Delegatura.

AÑO	DEMANDAS RECIBIDAS	PENDIENTES DE DECISIÓN
2019	2246	
2020	1643	
2021	1421	
2022	729	
TOTAL	6039	1021

Antes de realizar el correspondiente estudio ha de advertir este Despacho judicial que solo se pronunciara sobre el impulso procesal solicitado en las pretensiones y no sobre las resultas del proceso de reclamación económica, toda vez que el mismo es de conocimiento de autoridad administrativa y cuando existen otros recursos o medios de defensa es improcedente pretender su estudio bajo la acción de tutela.

Respecto al impulso procesal solicitado encuentra el Despacho que la H.Corte Constitucional en sentencia SU453-20, entre otras jurisprudencias ha indicado:

“La mora judicial. Afectación de los derechos constitucionales fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso

57. La acción de tutela fue consagrada en la Constitución en el artículo 86 como el mecanismo judicial de carácter preferente y sumario, diseñado para la protección inmediata de derechos constitucionales cuando estos se vean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad, y excepcionalmente, por particulares.
58. La omisión resulta de especial relevancia cuando se atribuye a autoridades investidas de la facultad de impartir justicia pues se encuentra íntimamente relacionada con su carga funcional y el cumplimiento de sus deberes. En concreto, el artículo 228 superior establece que los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Disposición constitucional que fue desarrollada por la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, en la que se consagraron los principios que rigen la administración de justicia, entre ellos la celeridad, la eficiencia y el respeto de los derechos de quienes intervienen en el proceso^[46]
59. En particular, la jurisprudencia constitucional ha planteado la clara relación existente entre la mora judicial y la afectación al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, consagrados en los artículos 29, 228 y 229 Superiores. Si bien es claro que los contenidos de los derechos



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

antes mencionados no pueden confundirse, su relación es intrínseca tanto para aquellos que pretenden acceder a la administración de justicia como para quienes están investidos de la función jurisdiccional. Ellos suponen la determinación de reglas como la consagración de vías procesales adecuadas, oportunidades para ejercer el derecho de acción, personas habilitadas para demandar, etapas dentro del procedimiento, términos^[47], etc., los cuales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. En esta medida, dilatar injustificadamente las actuaciones judiciales, además de constituir una vulneración al debido proceso, puede representar una negación del derecho de acceso a la justicia^[48]

60. Así, el derecho al debido proceso supone el cumplimiento de términos judiciales no como un fin en sí mismo, sino como medio para “asegurar que, a través de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la obtención de pronta y cumplida justicia”^[49]. Por ende, quien adelanta cualquier actuación judicial dentro de los términos previstos, ostenta el derecho a que se le resuelva del mismo modo, dentro del tiempo consagrado para ello, pues de no ser así se desconocerían sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, “comoquiera que no se brinda una respuesta oportuna frente a las pretensiones invocadas en su momento y se torna ilusoria la realización efectiva de la justicia material en el caso concreto”^[50].

61. Al respecto, la Corte Constitucional ha reconocido que existen fenómenos como la mora, la congestión y el atraso judiciales, que afectan estructuralmente la administración de justicia, por lo que en ciertos casos el incumplimiento de términos procesales no es directamente imputable a los funcionarios judiciales^[51], más si se tienen en cuenta la complejidad de los casos que pueden derivar en la práctica de pruebas, el cumplimiento de trámites, lo que deriva en el aumento del tiempo previsto por el legislador para la el agotamiento de las etapas o la totalidad del proceso^[52].

62. Es por esta razón que la jurisprudencia constitucional ha determinado criterios para establecer si la mora en la decisión de las autoridades judiciales es justificada o injustificada. Al respecto, la Corte ha generado una amplia jurisprudencia que es importante recordar en este caso, retomando la línea planteada en la sentencia T-186 de 2017. En un primer momento, en la decisión T-431 de 1992, esta Corporación negó el amparo solicitado por vencimiento de términos, sin consideración concreta.

63. En la decisión T-190 de 1995, se consagró que la obligatoriedad de los términos judiciales admitía excepciones en los casos en los que se comprobara “el carácter justificado de la mora”, pero que estas debían ser restrictivas y obedecer a situaciones probada y objetivamente insuperables, y debidamente reguladas por el legislador^[53]. Siguiendo dicha línea, en el fallo T-030 de 2005, la Corte reiteró que la inobservancia de los términos por parte de los funcionarios judiciales debe ser analizada en cada caso concreto, y que el vencimiento de términos legales per se no implica la lesión de derechos fundamentales, salvo la existencia de un perjuicio irremediable. Se precisó además que el reproche ante la omisión en la actuación judicial debe partir de un origen injustificado, es decir, que se deba a la



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

falta de diligencia por parte del funcionario judicial en la ejecución de sus obligaciones. Se enfatizó en que el análisis para concluir “si la mora era justificada o no, implicaba una valoración crítica del cumplimiento de los deberes por parte del funcionario judicial, entre los que se incluía la adopción de medidas tendientes a superar situaciones de congestión”^[54].

64. Ya en la sentencia T-803 de 2012 se definió la mora judicial^[55] y se reiteró que es necesario valorar la razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del incumplimiento para definir si se configura la lesión de derechos fundamentales. Para ello, se consagraron los siguientes criterios: (i) el incumplimiento de los términos judiciales; (ii) el desbordamiento del plazo razonable, siendo necesario valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global del procedimiento; (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la demora; y (iv) el funcionario incumplidor debía demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y debido proceso.

65. Se concluyó entonces que la mora se entiende justificada cuando (i) se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende, y (ii) se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles”.

66. En la providencia T-230 de 2013 se reiteraron las consideraciones previamente expuestas, precisando que en casos de mora judicial la acción de tutela es procedente cuando (i) se cumplan los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, y (ii) se acredite la existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que el remedio consistente en la alteración del turno es excepcional^[56].

67. En igual sentido, en la decisión T-441 de 2015, esta Corporación reiteró que, si bien la dilación injustificada o indebida en el cumplimiento de los términos procesales puede considerarse violatoria de derechos fundamentales, esto no significa, automáticamente, que se pueda alterar el orden de los procesos judiciales o el turno que se haya establecido para su fallo, salvo las excepciones consagradas legalmente^[57].

68. La Sala Plena, en la sentencia SU-394 de 2016, reiteró el anterior precedente, afirmando que la administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz, y que el respeto a los términos procesales debe ser perentorio y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales, por lo que el incumplimiento injustificado acarrea sanciones disciplinarias. Respecto de la dilación injustificada, se indicó que el juez de tutela debe estudiar si la demora u omisión atiende a razones constitucionalmente válidas o, por el contrario, se presenta ante la negligencia de los funcionarios judiciales. Se deberá entonces examinar si (i) se desconocieron los términos legales previstos para la adopción de la decisión; (ii) si la violación a estos se debe a la complejidad del caso, la actividad probatoria necesaria para tomar una decisión fundada, y en esa medida la actividad judicial se encuentra dentro de un plazo razonable y (iii) si no concurren elementos estructurales o de contexto objetivos e invencibles como situaciones de fuerza mayor o congestión judicial...”



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ**

En el presente caso la entidad accionada SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, indicó que la mora se encuentra justificada teniendo en cuenta el alto número de casos y presenta un cuadro en el que precisa tener conocimiento de 6.039 casos desde el año 2019, de los cuales 1.643, corresponden al año 2020, 1.421 al año 2021, 729 al año 2022; por lo que teniendo en cuenta que los procesos de los años 2021 y 2022 que fueron de posterior conocimiento y corresponden a 2.150 procesos y el orden cronológico, no comprende el despacho que quedando por resolver 1.021 procesos, no se haya resuelto el proceso instaurado desde el 26 de agosto de 2020 el cual solo ha surtido acto admisorio, por lo que al no acreditar la parte accionada razón válida para la mora del proceso, encuentra este Despacho Judicial que la entidad accionada SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, ha vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la accionante y con ello los incoados por la accionante mínimo vital, en conexidad con la salud y vida digna.

Por lo que dando cumplimiento a jurisprudencia ya invocada, este Despacho Judicial Tutelará los derechos al debido proceso y administración de justicia que le asisten a la accionante señora LUISA FERNANDA MORATO RIOS, y como quiera que el artículo 41 de la ley 1122 de 2007, concede entre otros aspectos a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, las facultades propias para fallar "...Reconocimiento económico de los gastos en que haya incurrido el afiliado por concepto de atención de urgencias en caso de ser atendido en una IPS que no tenga contrato con la respectiva EPS.." y en el parágrafo 2 del mencionado artículo se indica que "El procedimiento que utilizará la Superintendencia Nacional de Salud en el trámite de los asuntos de que trata este artículo será el previsto en el artículo 148 de la ley 446 de 1998" el cual establece:

"El procedimiento que utilizarán las Superintendencias en el trámite de los asuntos de que trata esta parte será el previsto en la Parte Primera, Libro I, Título I del Código Contencioso Administrativo, en especial el correspondiente al ejercicio del derecho de petición en interés particular y las disposiciones contenidas en el capítulo VIII. Para lo no previsto en este procedimiento, se aplicarán las disposiciones del Proceso Verbal Sumario consagradas en el procedimiento civil.

(Corte Constitucional - Inciso 1. declarado EXEQUIBLE, por el cargo estudiado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-274-03 de 1 de abril de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra).

Las Superintendencias deberán proferir la decisión definitiva dentro del término de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que se reciba la petición de manera completa. No obstante, en todo el trámite del proceso las notificaciones, la práctica de pruebas y los recursos interpuestos interrumpirán el término establecido para decidir en forma definitiva".

En consecuencia, la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD deberá proceder a dar impulso procesal al proceso interpuesto por la accionante señora LUISA FERNANDA MORATO RIOS y que fue radicado bajo el número NURC 1-2020-443346, ante la entidad accionada, y resolver el mismo dentro los treinta (30) días hábiles.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

Teniendo en cuenta que las entidades vinculadas Compensar EPS y Clínica Monserrat, no son las entidades competentes para resolver el presente asunto, este Despacho Judicial las desvinculará del presente asunto.

POR MÉRITO DE TODAS LAS CONSIDERACIONES PLASMADAS EN LA PARTE MOTIVA DE ESTE PROVEÍDO, ESTE JUZGADO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY,

RESUELVE:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y administración de justicia que le asiste a la señora **LUISA FERNANDA MORATO RIOS**, identificada con C.C. No. 1.014.209.124, y con ello los incoados por la accionante, al mínimo vital en conexidad con la salud y vida digna, de conformidad con la parte considerativa del presente fallo.

SEGUNDO: ORDENAR a la **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**, para que en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de este fallo, si aún no lo han hecho, dar impulso procesal al proceso interpuesto por la accionante señora **LUISA FERNANDA MORATO RIOS** y que fue radicado bajo el número NURC 1-2020-443346, ante la entidad accionada, y resolver el mismo dentro los treinta (30) días hábiles siguientes.

TERCERO: Notifíquese de esta decisión a las partes involucradas por el medio más expedito.

CUARTO: De no ser impugnada, remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

SANDRA MEJÍA MEJÍA
JUEZ

**JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA
DE BOGOTÁ**

El anterior auto se notificó por estado No. 67

Hoy 24 de junio de 2022

CAROLINA SANTAMARÍA LUNA
Secretaria

Firmado Por:

Carrera 7ª. No. 12C-23 Piso 12 Bogotá D.C.

Pág. 9

Sandra Mejia Mejia
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Familia 29 Oral
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **98c422e3022d5e24be2fa9c13b6c8bcca4a227bfaeddd9a72570011fe62151eb**

Documento generado en 23/06/2022 07:46:13 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>